

Desigualdad, mercado laboral y educación superior en América Latina

Abel Pérez Ruiz*

En el marco de la globalización económica emergen nuevas y viejas preocupaciones alrededor del vínculo entre la formación profesional y el mercado de trabajo, especialmente en el contexto latinoamericano. Esto es así por cuanto la reconfiguración de la oferta ocupacional, dentro de un esquema de libre mercado, impacta directamente en el tipo de conocimiento profesional valorado, así como en la gestión institucional de la educación superior. Desde esa perspectiva, los países latinoamericanos enfrentan el desafío de formar profesionales en un escenario de incertidumbre mediado por la presencia de las desigualdades socioeconómicas. Al amparo de estas últimas, las universidades se ven obligadas a diversificarse para garantizar una mayor cobertura educativa, de cara a una polarización en las oportunidades de inserción laboral.

En la actualidad asistimos a un momento histórico donde el orden mundial se define cada vez más por la internacionalización de los mercados, la recomposición de los sistemas productivos a través del desarrollo tecnológico, la preeminencia y volatilidad de los capitales financieros, la fragmentación espacio-temporal de los procesos de trabajo, etcétera. Estos elementos han venido a plantear nuevas y viejas preocupaciones acerca de la naturaleza del vínculo entre el sistema educativo y el mercado laboral desde el contexto latinoamericano. La

reordenación de los mecanismos institucionales para acumular e incorporar los conocimientos, especialmente en el ámbito de la formación profesional, se establece sobre la base de un deterioro en las condiciones laborales en términos de contratación, calidad y aprovechamiento de la mano de obra a diferentes niveles productivos. De ahí la necesidad de preguntarse: ¿sobre qué condiciones la educación superior se está articulando con las necesidades del mercado laboral en los países de América Latina? Bajo este fundamental cuestionamiento el presente artículo es un esfuerzo por atraer algunos criterios de análisis que abonen en la discusión alrededor de esta problemática.

La educación superior y su contexto

En nuestros días se presenta una preocupación más o menos extendida de que las instituciones educativas, en lo general, no están cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad de formar a las nuevas generaciones con las capacidades requeridas en una sociedad que se transforma profunda y aceleradamente (Chiappe & Guido, 2009; Didriksson, s/f; Marcelo, 2001; Mella, 2003; Tedesco, 1996). Al mismo tiempo existe una acentuada discusión en torno a si las exigencias que impone el escenario económico global, centradas en la extensión del libre mercado y en la racionalidad ins-

* Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098.

trumental, deben ser el anclaje único e indispensable sobre el cual se finquen las expectativas de formación futuras (Hargreaves, 2003; Hopenhayn, 2003; Ibarra, 2002).

Encontramos la emergencia de nuevos discursos orientados a anunciar el arribo de profundos procesos de transformación social y económica con efectos directos en los comportamientos de la vida social. Como voceros de estas formulaciones están aquellos que están familiarizados con las tecnologías de punta y vinculados con los sectores más modernos de la economía (Tedesco, 1996). De ahí la valoración del *conocimiento* como la variable definitoria del desarrollo productivo de los distintos países más allá de sus particulares procesos de inserción económica en el circuito global capitalista. Los recursos más apremiantes, se insiste, ya no se establecen en aquellos elementos de carácter material, sino en variados sistemas de información junto con las capacidades necesarias para producirlos y aplicarlos a situaciones diversas (Casalet, 2010).

En este ambiente las universidades, vistas como los centros de formación profesional por excelencia, condensan las expectativas de desarrollo y movilidad social para diversos sectores de la población. Sin embargo, en el camino se presentan algunos elementos que tienden a relativizar dicha visión sobre el papel de estas instituciones desde la realidad latinoamericana.

Con base en esta última consideración, el presente trabajo remarca algunos aspectos que engloban la educación profesional hoy en día. Una primera cuestión es la permanencia de las desigualdades socioeconómicas traducidas en un marcado empobrecimiento, exclusión, precariedad y falta de oportunidades de desarrollo para importantes grupos de la sociedad latinoamericana. Dicha condición sirve de marco entre quienes tienen la posibilidad de incorporarse a una instrucción superior y quienes se ven marginados de la misma.

Un segundo elemento reside en la acentuada precariedad, heterogeneidad y segmentación de los mercados de trabajo. Cada vez es más común, por una parte, la presencia de empleos eventuales o de medio tiempo, sin ningún tipo de garantía salarial o laboral, bajo estrategias de subcontratación, de baja remuneración y ajenos a un sistema general de prestaciones. Del mismo modo, el carácter de las actividades productivas se desenvuelve en dos esferas de acción fundamentales: la primera reconocida como “formal” por cuanto se inscribe dentro de un ámbito económico altamente estructurado, y la segunda ubicada como “informal” en razón de operar sobre mecanismos de *empleabilidad* (Pérez Sáinz, 2003) por fuera de los circuitos convencionales de regulación productiva.

Finalmente, un tercer aspecto radica en la situación de incertidumbre en que se ven envueltos los espacios universitarios, especialmente los de carácter público, en un contexto de crisis económica. Esta circunstancia hace que el gasto en educación superior se confine en medio de una expansión de la demanda educativa a este nivel, lo cual trae como consecuencia un deterioro en la calidad de la enseñanza, en particular en cuanto al desarrollo de la profesión académica (Brunner, 2002: 112). Al tiempo, la actual condición de la educación superior en los países latinoamericanos también produce otros efectos: 1) las oportunidades de incorporación a una carrera universitaria se vuelven cada vez más desiguales e inequitativas; 2) la gestión institucional resulta poco eficiente y de mala calidad; 3) los procesos de enseñanza se llegan a realizar en condiciones precarias en términos de infraestructura; y 4) existe un consentimiento oficial en la propagación de la oferta privada sin reparar suficientemente en sus niveles de calidad.

Al amparo de estos factores, el sistema educativo en lo general y el universitario en particular enfrentan una serie de retos de variada índole dentro de una nueva racionalidad que trata de regular los componentes de la formación profesional. Por ello la necesidad de revisar estos aspectos con mayor detalle con el fin de identificar las características subyacentes sobre las cuales educación y mercado laboral buscan articularse desde el ámbito latinoamericano.

El escenario de las desigualdades

Los procesos de reforma económica instrumentados en Latinoamérica desde los años ochenta del siglo pasado han configurado una nueva forma de entender las relaciones sociales en diferentes campos. A partir de las políticas neoliberales de primera generación, condensadas en el llamado “Consenso de Washington”, se instituyeron en nuestros países una serie de medidas de ajuste estructural tales como la apertura comercial, la integración a la internacionalización de la economía, el control de la inflación, la restricción monetaria, la desregulación productiva, la privatización de las empresas públicas, entre otras. Como lo advierte Gilberto Dupas (2008), el tránsito de un modelo de Estado benefactor a uno neoliberal supuso la sustitución de un capitalismo racional regulado por un capitalismo irracional no regulado construido sobre el mito del mercado auto-regulador.

En este marco un tema de preocupación recurrente reside en la desigual distribución de la riqueza, fenómeno cuya incidencia a lo largo de los años se ha articulado con carencias de variada índole: ausencia de oportunidades de

trabajo en un ambiente estable, restricciones para acceder a servicios de salud, falta de agua potable para amplios sectores de la población, escasez de vivienda, insuficiencia de educación de buena calidad, etcétera. La inserción de los países latinoamericanos al entorno de competencia global ha sido acompañada por economías debilitadas dentro de un marco de instituciones ineficientes e incapaces de resolver los problemas de inequidad presentes en la región.

Si bien los distanciamientos sociales varían en función de las condiciones de cada país, existe una tendencia general en el incremento tanto de la pobreza como de la desigualdad en los últimos años. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2008 poco más de un tercio de la población latinoamericana (180 millones) vivía en situación de pobreza con un incremento relativo de personas indigentes causada fundamentalmente por el alza en el precio de los alimentos (CEPAL, 2009). Frente a este panorama los discursos oficiales despreñados de organismos como el Banco Mundial (BM) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) insisten en la necesidad de las políticas de mercados abiertos para garantizar el crecimiento económico y, junto con ello, la posibilidad de otorgar beneficios a la población en su conjunto.

Como recurso retórico, la negación o relativización de la pobreza por parte de las autoridades políticas (Kliksberg, 2001: 8) se contrasta fuertemente con la extensión en el deterioro de las condiciones de vida para un importante número de personas. Esto conduce a una percepción imbuida de una gran desconfianza hacia las instituciones públicas por cuanto la ausencia de garantías sociales básicas se corresponde de una alta concentración del ingreso a favor de las élites económicas. La incorporación a la economía internacional se entretreje dentro de procesos de fragmentación de los sectores medios, circunstancia que abona en la polarización entre quienes se han beneficiado con la desregulación de los mercados y quienes se han visto excluidos de las “bondades” brindadas por la globalización.

La pobreza en América Latina, además, se ve acompañada por la extensión de la vulnerabilidad en función de la edad, el sexo y el origen étnico. Uno de sus aspectos sobresalientes reside en las altas tasas de fecundidad comportadas en los hogares de escasos recursos, circunstancia que propicia el crecimiento en el número de niños bajo esta condición. La presencia de niños pobres menores de 15 años supera en promedio 1.7 veces a la de las personas mayores de esa edad. Por su parte, las mujeres son quienes se ven más expuestas a la pobreza que los varones siendo

los casos de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Uruguay donde la tasa de pobreza supera a la de los hombres en 1.15 veces. Finalmente, existe una tendencia ascendente en la tasa de pobreza en los grupos de origen étnico, la cual excede entre 1.2 y 3.4 veces a la del resto de la población (CEPAL, 2009: 13-16).

Por otro lado, la volatilidad de los mercados integrados se enmarca en ambientes donde las élites empresariales buscan garantizar su base acumulativa mediante estrategias de flexibilidad¹ a fin de hacer frente a la incertidumbre económica, pero en contrapartida amplios sectores de la población se ven forzados a estrategias productivas de sobrevivencia sin lograr saldar la pauperización en la cual se encuentran inmersos (Pérez Sáinz & Mora, 2006: 432).

En este contexto, el gasto social instrumentado por los distintos gobiernos —si bien ha comportado un aumento significativo en los últimos años— no ha podido evitar que la desigualdad siga siendo elevada, ya que, en promedio, el decil más rico recibe alrededor de un 36% de los ingresos de los hogares, en tanto que la diferencia de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre es de aproximadamente 20 veces (Mussi & Afonso, 2008, 153). Bajo estas circunstancias la política del gasto se ha dirigido, en lo fundamental, a la puesta en práctica de medidas contra-cíclicas pero sin lograr una mayor igualdad de acceso entre grupos sociales de distintos recursos. Ante los vaivenes de la economía, los países se enfrentan cada vez más al problema de establecer estrategias óptimas de redistribución que se vuelvan fundamento de la legitimación y la cohesión social.

Como estrategia de política pública, los distintos gobiernos han intentado reducir las brechas de la desigualdad, en especial a través de las llamadas “transferencias monetarias condicionadas”, las cuales sirven como mecanismos de subvención económica para las familias más pobres a cambio de que estas últimas garanticen un patrón de comportamiento orientado a salir de la pobreza, como el de mantener a los hijos en la escuela (Puryear & Malloy, 2009). En el caso de países como México y otras naciones centroamericanas, se presenta además, como “válvula de escape”, el hecho de contar con remesas provenientes de los grupos migrantes,

¹ El concepto de flexibilidad no posee un significado unívoco en virtud de existir varias fuentes teóricas que lo han tratado. De ahí la existencia de una amplia discusión sobre el tema, ya que para algunos la flexibilidad puede significar una manera positiva de proyectar mayores habilidades, conocimientos y destrezas en un ambiente económico de competitividad global, pero para otros puede resultar una manifestación negativa de contratarse en empleos de medio tiempo, con salarios ínfimos y sin ningún tipo de garantía laboral (Arango, 1999: 125).

fundamentalmente los radicados en Estados Unidos. No obstante, la situación de crisis económica experimentada por el país del norte ha repercutido en la disminución de estos recursos, situación que para las naciones expulsoras de mano de obra se vuelve más preocupante ante el ingreso de nuevos pobres en el escenario social².

Existe una idea más o menos compartida de que el carácter del gasto social es neutral o regresivo, por lo que no ha logrado redistribuir de manera óptima la riqueza nacional hacia los sectores más desfavorecidos, siendo los servicios de educación y salud los más afectados al ostentar una baja calidad en la mayoría de los países (Puryear & Malloy, 2009). En estas circunstancias la desigual distribución acumulativa se erige como uno de los principales obstáculos a los cuales se enfrentan las naciones latinoamericanas en los albores del siglo XXI, y cuya repercusión impacta directamente en las oportunidades de acceso a una instrucción de carácter formal.

En síntesis, América Latina comporta una estratificación muy marcada, la cual contribuye en la reproducción de la desigualdad así como en la restricción de las oportunidades para acceder a una formación educativa más amplia. Como lo refleja la Gráfica 1, en varios países del área el promedio de años cursados no rebasa los 10 en aquellos hogares no vulnerables a la pobreza, mientras que en los hogares vulne-

rables a la misma el promedio de años se reduce a menos de ocho. Lo anterior nos habla de una existencia diferenciada en los niveles de calificación de la población, circunstancia que se combina con el mantenimiento de un marco precario en cuanto a la oferta ocupacional se refiere.

La fragmentación del mercado de trabajo

La integración global de los mercados, junto con los procesos de reestructuración productiva a diferentes niveles, ha traído consigo nuevas formas de concebir la relación entre capital y trabajo. Esta circunstancia, a su vez, ha impactado en el carácter de la vinculación entre sistema educativo y mercado laboral. El reordenamiento de las ocupaciones se inscribe en un marco de desregulación que apunta hacia criterios más flexibles en los mecanismos de contratación y despido, capacitación, aprovechamiento y movilidad de la mano de obra.

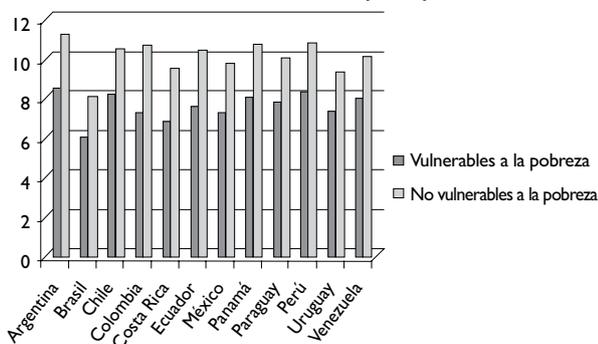
En este escenario, la relación entre educación y empleo no puede establecerse únicamente a partir de la continua expansión de los sistemas educativos como parte de una política orientada a ampliar la cobertura universitaria sin antes reparar en las exigencias formativas del mercado de trabajo. La condición de *adaptabilidad*, presente en los mercados laborales ante los imperativos de la globalización, presiona fuertemente en el tipo de conocimiento profesional valorado así como en los ordenamientos institucionales de la educación superior.

No es casual, por tanto, la tendencia dominante hacia un tipo de formación más técnica o comercial que actúa como requerimiento básico *vis a vis* la reconfiguración de los empleos ofrecidos junto con la introducción de criterios estandarizados relativos a la calidad y a la competitividad de las empresas a nivel global. Sobre la base de estas incidencias, las proclamas de la *modernización productiva* se alientan desde contextos marcados por una alta heterogeneidad social y cultural que repercute en la diferenciación de las expectativas profesionales u ocupacionales en diversas latitudes de la región.

Desde esa perspectiva, el marco acumulativo –basado en lo fundamental en una política de apertura y reestructuración económica– ha hecho que el mercado de trabajo comporte una serie de transformaciones fundamentales en su composición.

En primer término se encuentra el declive del empleo público, el cual se ha visto acompañado de una desconcentración estatal en la oferta de bienes y servicios; en segundo lugar se observa el predominio del sector servicios como reducto principal de la oferta de trabajo, y cuya incidencia

Gráfica 1
Promedio de años de educación de los integrantes de hogares de 25 años y más por categoría de vulnerabilidad (2007)



Nota: Las categorías de vulnerabilidad se establecen de la siguiente manera: vulnerables a la pobreza (1.2 a 1.8 de la línea de la pobreza) y no vulnerables a la pobreza (más de 1.8 de la línea de la pobreza).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009). *Panorama Social de América Latina 2009*. Documento Informativo.

² Por citar sólo un ejemplo, en México –durante los primeros ocho meses del 2009– la caída de las remesas llegó a ser de cerca del 36% debido a la abrupta caída del sector de la construcción en Estados Unidos, principal nicho ocupacional para los trabajadores migrantes (“Caen las remesas...”).

se rodea de una precarización salarial junto con mecanismos de desregulación laboral; un tercer elemento reside en la incorporación creciente de la mano de obra femenina en un ambiente de proliferación de puestos de trabajo a tiempo parcial; un cuarto aspecto descansa en la declinación del empleo seguro o estable a favor de la contratación eventual sin ningún tipo de garantía laboral; un quinto está vinculado con la individualización de los convenios de trabajo frente a la pérdida de la centralidad de los sindicatos como organizaciones de negociación colectiva; y finalmente la persistencia del llamado autoempleo de subsistencia que, tal y como lo sustentan Pérez Sáinz y Mora, tiende a constituirse en economía de la pobreza tanto en las áreas urbanas como en las rurales (Pérez Sáinz & Mora, 2006: 449).

Bajo este panorama, la reconfiguración del mercado de trabajo presenta componentes de dualización y fragmentación con una alta dosis de riesgo en términos de conflictividad social en razón de estar reproduciendo patrones de precariedad, exclusión y pobreza para un importante sector de la población. En este marco de economías heterogéneas y segmentadas se generan desigualdades no sólo en la relación capital-trabajo, sino además entre los propios trabajadores, es decir, entre los pertenecientes a un ámbito plenamente estructurado, con ciertas garantías salariales y los adscritos a un sector de autoempleo de subsistencia sin un ingreso regular, sin acceso a los beneficios de la seguridad social ni a algún tipo de alternativa económica por causa de la cesantía (Pérez Ruiz, 2010).

Paralelamente, la propia noción de trabajo se está viendo alterada ante la presencia del desempleo estructural, pero sobre todo por la incursión de nuevas modalidades de empleo. Observamos así la creación de ocupaciones flexibles, en su mayor parte de carácter temporal o a tiempo parcial, principalmente en el sector servicios con personal poco calificado y con bajos niveles de productividad (Kovács & Cerdeira, 2009: 73). Por otro lado, también se hacen patentes aquellas actividades que se vinculan directamente con las tecnologías de la información, las cuales conducen a una reorganización del tiempo y el espacio, así como a una redefinición de la inserción ocupacional como producto del trabajo en red o a distancia en diferentes escenarios productivos (Escudero, 2008).

Estas transformaciones en la naturaleza de los empleos dan cuenta de un marco muy complejo sobre el cual se establecen mecanismos variados de inclusión y exclusión alrededor del mercado laboral. Sobre estas condiciones, la preocupación central se dirige al reconocimiento de estos procesos de cambio y sus implicaciones para aquellos que

aspiran u ostentan una formación profesional. En ese sentido, la flexibilidad del mercado de trabajo se asume como la vía necesaria para la libertad de acción de las empresas en el aprovechamiento de la mano de obra a fin de garantizar la productividad y el crecimiento económico (Kovács y Cerdeira, 2009: 76). Pero una parte sustancial de esta flexibilidad se está traduciendo en una marcada incertidumbre laboral bajo la impronta de empleos mal pagados y poco reconocidos, aun para quienes cuentan con una acreditación de tipo profesional.

En ese mismo orden de ideas, el ambiente de competitividad creciente en el marco de la globalización tiene efectos directos en las formas de gestión de las empresas. La más característica es que en lugar de garantizar un empleo de larga duración con aumentos salariales regulares, se está adoptando un modelo bajo el cual la permanencia y el salario están condicionados al propio desempeño de la persona, en tanto que el trabajo se percibe como parte de un proceso de tránsito ocupacional de corto o mediano plazo. De este modo, la estabilidad no se vislumbra como el objetivo primordial a alcanzar, sino la posibilidad de aprender nuevas habilidades y conocimientos como parte de la transitoriedad de los puestos desempeñados. Desde el discurso gerencial, lo anterior no hace peores ni mejores los empleos ofrecidos, simplemente los vuelve distintos de cara a un entorno altamente cambiante y flexible (Tilly, 2000: 110).

Frente a estos ordenamientos, el sentido de la profesión puede oscilar en dos vertientes diametralmente distintas: por una parte como una vía propicia para la demostración de capacidades efectivas en un ambiente de alta competencia e integración global; y por otra como desvalorización de los saberes aprendidos sin una aplicación o reconocimiento real y, sobre todo, sin ninguna perspectiva de certidumbre laboral. Desde luego estas valoraciones se encuentran articuladas con determinados factores que inciden tanto del lado de la oferta, es decir, la edad, el sexo, la posición en el hogar, etcétera, como de la demanda a través de la rama de actividad, el tipo de organización productiva, el grupo ocupacional, la jornada de trabajo, etcétera (Mora & De Oliveira, 2009: 57).

En consecuencia, la relación entre profesión y mercado de trabajo en América Latina se inserta en ambientes sociales sobre los cuales confluyen contextos institucionales, expectativas ocupacionales, marcos regulatorios, trayectorias laborales y estrategias empresariales de muy variado orden y complejidad. Esta consideración plantea, de inicio, no suponer que las actuales condiciones de flexibilidad y reorganización productiva se correlacionan positivamente con una revaloración de la formación profesional, en especial de los jóvenes, por cuanto que supone el aprovechamiento

de una mano de obra más comprometida y adaptable, lo cual les ha permitido a los empleadores reducir sus costos de inserción laboral³. En realidad los vínculos entre la profesión y los requerimientos de las empresas transitan dentro de procesos ambiguos, complejos e, incluso, contradictorios.

Los derroteros de la educación superior

En esta reorganización de la estructura económico-social bajo un esquema de libre mercado las instituciones de educación superior se presentan como uno de los sectores clave porque engloban las expectativas de avance profesional en un entorno de competencia internacional. Es bajo este ambiente de competitividad como los empleadores demandan, cada vez más, profesionales capaces de desenvolverse en escenarios complejos, inciertos, contradictorios y dinámicos (Moreno, 2009: 71). Una de las exigencias del mercado laboral reside en la adaptación a los cambios así como a formas de trabajo diversificadas y contingentes. De este modo los imperativos de la integración global influyen directamente sobre la idea misma de educación, cuya orientación demarca perfiles profesionales con conocimientos de dominio práctico, así como un manejo asertivo de problemas en los distintos ámbitos de la producción.

A la par de estas exigencias se instituyen nuevos discursos asociados con las innovaciones tecnológicas, cuya incidencia marca un redimensionamiento de los procesos productivos, los estilos de vida, los aprendizajes y los dispositivos institucionales que les dan cobijo. La noción de una era caracterizada por la rapidez de los flujos de información y sus diversas aplicaciones prácticas se resume en la categoría *sociedad del conocimiento* bajo la cual se yergue todo un esquema discursivo anclado en la inevitabilidad de un tipo de pensamiento único, pero sobre la base de un mundo altamente heterogéneo en el que se confrontan voluntades y proyectos de muy variada índole (Ibarra, 2002: 78).

Ante esta situación la pregunta sobre el carácter que revisten las universidades frente a la complejidad presente en las sociedades latinoamericanas y, especialmente, frente a la demanda de formación profesional en la región adquiere particular relevancia. Como instituciones, las universidades

han estado asociadas íntimamente con el progreso social (Ibarra, 2002: 76) al tiempo que se presentan al amparo de una ética del servicio como parte de ciertos principios normativos que la sociedad reconoce como ejemplares. Bajo esa óptica, a la educación superior se le visualiza como un instrumento habilitador de los procesos de crecimiento y desarrollo productivo dentro de una estrategia de modernización específica. Las universidades expresan así un tipo de racionalidad institucional fincado en la formación de sujetos capaces de contribuir con su preparación a los requerimientos de una sociedad en constante cambio.

Del mismo modo, las universidades, en especial las públicas, se constituyen en los referentes de acceso profesional para los sectores medios y, en buena medida, también para las clases bajas, quienes se ven impedidas de acceder a otro tipo de ofrecimiento educativo a este nivel (Moreno-Brid & Ruiz, 2009: 9). En virtud de ello, la educación universitaria representa la posibilidad de adquirir una formación inserta dentro de un imaginario donde se acumulan y se recrean las aspiraciones de ascenso social entre la población.

Sin embargo, la creciente demanda por ingresar a los estudios post-secundarios, junto con las limitantes presupuestarias presentes en los países del área, produce un escenario problemático para el sistema educativo, en particular para las universidades de carácter público⁴. Es un rasgo común que las necesidades de ingreso a los estudios universitarios se enmarquen dentro de una ausencia de planificación gubernamental eficaz que logre articular íntegramente las exigencias de cobertura, pertinencia, calidad y financiamiento educativo. En su lugar incurren acciones de corto plazo, basadas en una visión gerencialista de la educación y con una aplicación parcial de programas orientados a fomentar el desarrollo sostenible a través de la formación de profesionales. A ello se agrega la falta de un vínculo suficientemente fuerte entre las universidades y los sectores productivos locales, lo cual propicia una fragmentación en el aprovechamiento real del conocimiento en función de los requerimientos económicos de cada país.

Esta falta de planificación educativa, como afirma Royero (2002), tiene su base en una herencia política indiferente hacia las necesidades reales del sector junto con un

³ Sobre el particular, Villavicencio (2005) advierte que los procesos de innovación de las empresas no necesariamente se ven acompañados de una incorporación extensiva de trabajadores con un perfil profesional particular; antes bien, cada organización articula de formas diversas los conocimientos y experiencias de cada individuo, de tal suerte que aun los saberes tácitos se convierten en un recurso útil para la mejora organizacional en las actuales condiciones de competencia global.

⁴ Desde los años setenta del siglo XX en América Latina se gesta un proceso de expansión que marca un punto de quiebre en los sistemas de educación superior; es decir, de un patrón orientado hacia la formación de las élites cuyo destino profesional era fundamentalmente la burocracia gubernamental, se transita a una educación de masas que implica no sólo absorber un número creciente de aspirantes como parte del bono demográfico, sino además formar, a un ritmo acelerado, profesionales en nuevas carreras y áreas de especialización (Klein & Sampaio, 2002: 31).

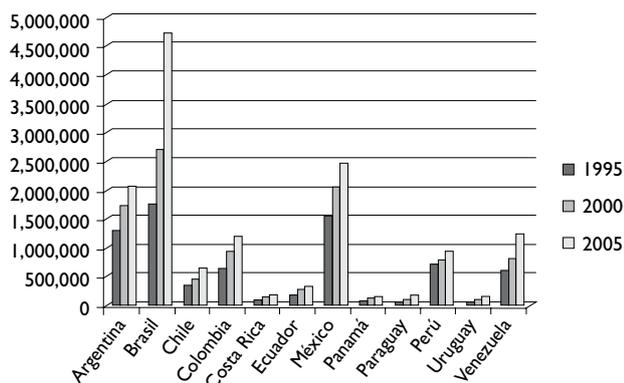
control irrestricto por parte de la burocracia estatal, que obstaculiza la autonomía de gestión en diversos espacios universitarios. Para algunos, esta situación habla de una crisis de los sistemas de educación superior en términos de calidad educativa por cuanto que los resultados obtenidos no se corresponden con las necesidades de los diferentes grupos involucrados, incluidos en primer término los propios estudiantes, quienes basan sus expectativas futuras en alcanzar un estatus profesional que se articule de manera óptima con las demandas del mercado de trabajo.

Diversos factores entran en juego para dar cuenta de la actual situación: en principio la expansión creciente de la matrícula en estos últimos años (véase Gráfica 2), la cual se articula con en el deterioro de la educación a este nivel; en segundo término, la incapacidad del sistema para atender las exigencias de una economía altamente cambiante y competitiva (Klein & Sampaio, 2002: 92); en tercer lugar, la diversificación institucional expresada en la aparición de nuevos tipos de organización educativa sin una concepción propiamente académica y que ofertan carreras o cursos de corta duración⁵ (Días Sobrinho, 2005), especialmente hacia

grupos de estudiantes rechazados por otras instituciones de mayor prestigio; y por último, la crisis de financiamiento por la que atraviesan los países latinoamericanos desde hace varios años. De tal suerte, estos componentes se combinan para presentar un panorama permeado por la incertidumbre alrededor de los sistemas de educación superior en la región.

De cara a estas circunstancias, ha predominado un discurso tecnocrático vinculado con las recomendaciones de las agencias multilaterales, cuya fórmula consiste en la necesidad de redireccionar el papel del Estado en materia de gestión educativa, lo cual se traduce en fundamentar sus estrategias de acción sobre la base racional del costo-impacto; esto es, en el manejo óptimo de los escasos recursos en aras de un mejor aprovechamiento educativo de cada país. La participación presupuestal en este ámbito (véase Gráfica 3) se inscribe dentro de una política de disciplinamiento económico con efectos directos en las condiciones de infraestructura escolar, la profesionalización académica, la inversión en ciencia y tecnología, la posibilidad de cobertura universal, etcétera. Esto último viene a plantear un cuestionamiento sobre los alcances efectivos de las universidades públicas en el contexto latinoamericano. Para algunos, la legitimidad social de estos espacios educativos se diluye en proporción a las insuficiencias mostradas en términos de calidad, equidad y eficiencia, ya sea por la masificación que ostentan o por su bajo índice de eficiencia terminal (Villanueva, 2010: 98).

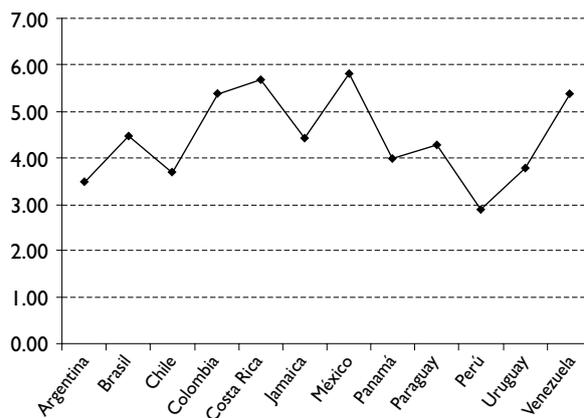
Gráfica 2
Evolución de la matrícula universitaria
en América Latina (1995-2005)



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Villanueva, E. (2010). "Perspectivas de la educación superior en América Latina: construyendo futuros". *Perfiles Educativos*, xxxii (129), 86-101.

⁵ Se habla aquí específicamente de instituciones privadas de carácter confesional o laico que han experimentado un crecimiento importante en los últimos años en varios países del área y que, si bien presentan un adecuado manejo de la gestión financiera a diferencia de las instituciones públicas, tienen el inconveniente de responder más a los intereses matriculares que a los propiamente académicos, situación que afecta en su calidad académica o formativa debido a estar sujetas a una racionalidad de mercado donde el estudiante se ve, ante todo, como un "cliente" o como una "unidad de negocio" dispuesto y disponible para el mercado de trabajo y no como un sujeto con capacidad para construir conocimiento.

Gráfica 3
Inversión pública en educación superior
con relación al PIB (%) en América Latina (2006)



Fuente: Gazzola, A. L. (2008). *Panorama de la Educación Superior en América Latina y el Caribe*. Cartagena de Indias: UNESCO/IESALC. Disponible en <www.iesalc.unesco.org/ve/.../ana_lucia_gazzola_panoramaes_cres20...>.

Asimismo, las universidades enfrentan el problema de la desarticulación entre investigación y aprovechamiento productivo. A ese respecto, es común que el sector industrial latinoamericano busque mejorar sus bases productivas a través de la importación de tecnología proveniente de los países desarrollados (Moreno-Brid & Ruiz, 2009: 24). La falta de políticas consistentes para fomentar el desarrollo científico-técnico desde los propios espacios universitarios, junto con el desinterés oficial por forzar acuerdos cooperativos entre universidades y empresas privadas, hace difícil la generación de profesionales de la investigación que guíen su práctica en colaboración estrecha con las necesidades productivas de cada país. A esto se añade una lógica de evaluación del trabajo académico que, más que elevar la calidad educativa, se ha convertido al paso del tiempo en un mecanismo de control burocrático para medir la productividad desde un esquema de puntajes.

Este esquema se incorpora como una forma de incentivar el trabajo de investigación a través de apoyos financieros avalados por grupos de pares, pero sobre todo para cubrir el deterioro económico de la labor docente ante la falta de presupuesto. No obstante, en la práctica dicho esquema ha funcionado como una arena de representación de intereses entre la comunidad académica en la que se disputan recursos y prerrogativas de variada índole. De esta suerte, la producción del conocimiento ha derivado en un dispositivo de segmentación del trabajo académico con base en las recompensas salariales diferenciadas, mientras que su pertinencia no se pondera en función de su valor social, sino por su utilidad comercial o bien por la publicación desenfundada de textos que casi nadie lee (Ibarra & Porter, 2007: 147).

Reflexiones finales

El reto que tienen por delante los países latinoamericanos a fin de articular la formación universitaria con las expectativas sociales basadas en el desarrollo profesional y la movilidad social es muy grande. Como se ha referido en el presente trabajo, las condiciones sobre las cuales América Latina ha tenido que vincularse con los procesos de integración económica global delinean un panorama de incertidumbre mediado por la presencia de las desigualdades socioeconómicas.

El problema de la pobreza —como expresión emblemática de la desigualdad— sigue constituyéndose en un asunto pendiente dentro de la agenda latinoamericana. Los distintos grados de exclusión a que se ven expuestos determinados grupos sociales a partir de este fenómeno hacen difícil, por una parte, garantizar la continuidad de la educación entre la

población joven y, por la otra, rectificar la tendencia dominante de actividades económicas precarias y constituidas al margen de un mercado de trabajo seguro o estable.

En esta perspectiva las universidades se ven obligadas a diversificarse en medio de un ambiente que reconfigura continuamente el carácter de las ocupaciones pero que al mismo tiempo polariza las oportunidades de inserción laboral. Bajo este esquema el conocimiento profesional valorado se carga cada vez más de ciertos emblemas para hacer frente a la incertidumbre o la transitoriedad de los empleos, tales como “creatividad”, “flexibilidad”, “innovación” y “competencia”.

Lo anterior se corresponde con la insistencia de una reformulación de los diseños curriculares junto con la gestión del propio conocimiento a favor de un perfil profesional adaptable a los cambios, abierto a las innovaciones técnicas y con capacidad de resolución en los diferentes entornos productivos. Ello abre la discusión (nada nueva por cierto) en pensar la formación profesional *para y desde* la sociedad —como parte de un *ethos* basado en el bien común—, o bien *para y desde* el mercado —dentro de una lógica racional-instrumental—, lo cual adquiere una singular dimensión cuando la razón de ser de las universidades se inserta en medio de un tejido social donde las aspiraciones socioeconómicas de los jóvenes oscila entre dos extremos; de un lado en la posibilidad de cursar una carrera como elemento legítimo de formación, o bien, como es el caso de algunos de nuestros países, en la incorporación a realidades permeadas por la violencia como el sicariato, el narcotráfico o la delincuencia organizada.

Fuentes

- “Caen las remesas, por culpa de la recesión en EU, dice el gobierno mexicano” (2010). *La Jornada. Migración*. Recuperado de <<http://migracion.jornada.com.mx/estadisticas/caen-las-remesas-por-culpa-de-la-recesion-en-eu-dice-el-gobierno-mexicano>> (consultado el 16 de abril de 2010).
- Arango, L. (1999). “Género, globalización y reestructuración productiva”. En Arango L. y López, C. (Comps.), *Globalización, apertura económica y relaciones industriales en América Latina* (pp. 118-137). Santa Fe de Bogotá: CES.
- Brunner, J. J. (2002). “Educación en América Latina durante la década de 1980: la economía política de los sistemas”. En Kent, R. (Comp.), *Los temas críticos de la educación superior en América Latina en los años noventa* (pp. 106-168). México: FCE/FLACSO/UAA.
- Casalet, M. (2010). “El tránsito de México hacia una economía basada en el conocimiento”. *Ide@s Concyteg*, 5 (56), 109-116.

- Chiappe, M.V. & Guido, L. (2009, julio). "El vínculo entre universidad e innovación educativa". *Revista Iberoamericana de Educación*, 50, 1-11. Recuperado de <<http://www.rioei.org/expe/2869Guido.pdf>> (consultado el 13 de octubre de 2009).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009). *Panorama Social de América Latina 2009*. Documento Informativo.
- Días Sobrinho, J. (2005). "Evaluación y reformas de la educación superior en América Latina". *Perfiles Educativos*, 27 (108), 31-44.
- Didriksson, A. (s/f). *La construcción de nuevas universidades para responder a la construcción de una sociedad del conocimiento*. Recuperado de <http://www.riseu.unam.mx/documentos/acervo_documental/txtid0044.pdf> (consultado el 27 de marzo de 2012).
- Dupas, G. (2008, mayo-junio). "Pobreza, desigualdade e trabalho no capitalismo global". *Nueva Sociedad*, 215, 62-78.
- Escudero, J. (2008). "La educación, puerta de entrada o de exclusión a la sociedad del conocimiento". En Martínez, F. y Prendes, M. P. (Coords.), *Nuevas Tecnologías y Educación* (25-57). Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Gazzola, A. L. (2008). *Panorama de la Educación Superior en América Latina y el Caribe*. Cartagena de Indias: UNESCO/IESALC. Disponible en <www.iesalc.unesco.org/ve/.../ana_lucia_gazzola_panoramaes_cres20...>.
- Hargreaves, A. (2003). *Enseñar en la sociedad del conocimiento*. Madrid: Octaedro.
- Hopenhayn, M. (2003, diciembre). "Educación, comunicación y cultura de la sociedad de la información: una perspectiva latinoamericana". *Revista de la CEPAL*, 81, 175-193.
- Ibarra, E. (2002, enero-abril). "La 'nueva universidad' en México: transformaciones recientes y perspectivas". *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 7 (14), 75-105.
- Ibarra, E. & Porter, L. (2007). "Dilemas de la evaluación del trabajo académico: ¿estamos preparados para transitar del castigo a la valoración?". En Díaz, A. y Pacheco, T. (Comps.), *Evaluación y cambio institucional* (pp. 146-172). México: Paidós.
- Klein, L. & Sampaio, H. (2002). "Actores, arenas y temas básicos". En Kent, R. (Comp.), *Los temas críticos de la educación superior en América Latina en los años noventa* (pp. 31-105). México: FCE/FLACSO/UAA.
- Kliksberg, B. (2001). *Diez falacias sobre los problemas sociales en América Latina*. Buenos Aires: Centro de Documentación en Políticas Sociales.
- Kovács, I. & Cerdeira, M. de C. (2009, verano). "Calidad de empleo: ¿quiebra generacional versus quiebra societal?". *Sociología de Trabajo*, 66, 73-105.
- Marcelo, C. (2001). "Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento". *Revista Complutense de Educación*, 12 (2), 531-593.
- Mella, E. (2003). "La educación en la sociedad del conocimiento y del riesgo". *Enfoques Educativos*, 5 (1), 107-114.
- Mora, M. & De Oliveira, O. (2009). "El desafío de la inclusión frente a las tendencias de exclusión laboral". *Sociología del Trabajo*, 66, 47-72.
- Moreno, T. (2009). "Competencias en educación superior: un alto en el camino para revisar la ruta de viaje". *Perfiles Educativos*, XXXI (124), 69-92.
- Moreno-Brid, J.C. & Ruiz, P. (2009). "La educación superior y el desarrollo económico en América Latina". *Cuadernos de la CEPAL*, Serie Estudios y Perspectivas, Sede Subregional en México, 106.
- Mussi, C. & Afonso, J. R. (2008, mayo-junio). "¿Cómo conciliar desarrollo económico con bienestar social? Algunas reflexiones sobre los nuevos desafíos latinoamericanos". *Nueva Sociedad*, 215, 147-166.
- Pérez Ruiz, A. (2010, julio-agosto). "Reflexiones sobre política pública y sistema de pensiones en América Latina. Un recuento". *El Cotidiano*, 25 (162), 99-105.
- Pérez Sáinz, J. P. (2003, marzo-abril). "Globalización, riesgo y empleabilidad. Algunas hipótesis". *Nueva Sociedad*, 184, 68-85.
- Pérez Sáinz, J. P. & Mora, M. (2006, julio-septiembre). "Exclusión social, desigualdades y excedente laboral. Reflexiones analíticas sobre América Latina". *Revista Mexicana de Sociología*, 68 (3), 431-465.
- Puryear, J. & Malloy, M. (2009). "Pobreza y desigualdad en América Latina". *Informe del Inter-American Dialogue*, Washington D.C. Recuperado de <<http://www.thedialogue.org>> (consultado el 18 de agosto de 2010).
- Royero, J. (2002). "Contexto mundial sobre la evaluación en las instituciones de educación superior". *Revista Iberoamericana de Educación*. Recuperado de <<http://www.rioei.org/deloslectores/334royero.pdf>> (consultado el 4 de septiembre de 2010).
- Tedesco, J. C. (1996, noviembre-diciembre). "La educación y los nuevos desafíos del ciudadano". *Nueva Sociedad*, 146, 74-89.
- Tilly, Ch. (2000). "Trabajo de tiempo parcial, empleo de bajos salarios y lucha de clases en los Estados Unidos". *Trabajo*, 2 (3), 105-118.
- Villanueva, E. (2010). "Perspectivas de la educación superior en América Latina: construyendo futuros". *Perfiles Educativos*, XXXII (129), 86-101.
- Villavicencio, D. (2005, julio-diciembre). "El conocimiento tácito y la valoración del trabajo colectivo en los procesos de innovación". *Trabajo*, 1 (1), 99-122.